03/02/2021 – AMPARO

2832-2019

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO.
Guatemala, tres de febrero de dos mil veintiuno.

I) Se integra con los suscritos magistrados, de conformidad con los números de actas cuarenta y cinco guion dos mil diecinueve (45-2019) de fecha once de octubre de dos mil diecinueve y cuarenta guion dos mil veinte (40-2020) de fecha doce de octubre de dos mil veinte, correspondientes a las sesiones extraordinarias de la Corte Suprema de Justicia respectivamente, con fundamento en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial y de la Opinión Consultiva emitida por la Corte de Constitucionalidad el ocho de octubre de dos mil diecinueve, expediente cinco mil cuatrocientos setenta y siete guion dos mil diecinueve (5477-2019). II) Se tiene a la vista para dictar sentencia el amparo solicitado por (...), **EN REPRESENTACIÓN LEGAL Y EN EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE SUS MENORES HIJOS (...) y (...)**, en contra de la **MINISTRA DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL**. La compareciente actúa bajo el patrocinio del abogado Mario Ernesto Sapper Cuyun.

ANTECEDENTES

A) Fecha de interposición: quince de octubre de dos mil diecinueve.

B) Acto reclamado: la urgente necesidad de que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social proporcione, el medicamento “ELAPRASE IDURSULFASA Viales de 6MG/3ML Dosis 0.5mg x Kilo de peso, que corresponde a 26 kilos equivalente a 2 viales semanales para ser fundido de 3 a 4 horas la dosis debe ser readecuada cada 6 meses de acuerdo a su peso por tiempo indefinido” a su menor hijo (...), y el medicamento “ELAPRASE IDURSULFASA Viales de 6MG/3ML Dosis 0.5mg x Kilo de peso, que corresponde a 20 kilos equivalente a 2 viales semanales para ser fundido de 3 a 4 horas la dosis debe ser readecuada cada 6 meses de acuerdo a su peso por tiempo indefinido” a su menor hijo (...); debido a que padecen la enfermedad llamada Mucopolisacaridosis tipo II (Síndrome de Hunter) y la administración de este medicamento puede salvarles la vida y mejorar su condición, toda vez que ese padecimiento es progresivo, debilitante y a menudo fatal con pronóstico desalentador y los niños que la padecen presentan problemas en todo su sistema, por falta de enzimas que el cuerpo no produce y pueden morir a temprana edad.

C) Fecha de notificación ala postulante: por la naturaleza del acto reclamado no existe notificación.

D) Uso de recursos contra el acto impugnado: ninguno.

E) Violación que denuncia: derecho a la salud.

HECHOS QUE MOTIVAN EL AMPARO

A) De lo expuesto por la postulante y de los antecedentes, se resume lo siguiente:

a) la señora (...) con la interposición del amparo expuso, que sus menores hijos de edad de nombres (...) y (...), fueron diagnosticados por el doctor Julio Rafael Cabrera Valverde, con la enfermedad llamada Mucopolisacaridosis tipo II (Síndrome de Hunter), lo cual fue confirmado con los exámenes practicados el veintisiete de marzo de dos mil quince por parte del "LABORATORIO DE NEUROQUÍMICA DR. N.A. CHAMOLES" de la ciudad de Buenos Aires de la República Argentina; b) que en el Hospital Roosevelt los menores fueron evaluados por doctores especialistas quienes les realizaron varios exámenes médicos, entre ellos, cardiogramas, hematologías, ultrasonidos complementarios de hígado y vaso, además fueron transferidos al Departamento de Cardiología, Otorrinolaringología, Oftalmología y Neumología para evaluación médica, según consta en los carnets de identificación y consultas para exámenes médicos números cuatrocientos treinta y uno guion trescientos noventa y seis (431-396) y cuatrocientos treinta y uno guion trescientos noventa y siete (431-397), también se requirió al Departamento de Genética de ese hospital que evaluara a los menores de edad y se les diera seguimiento, porque sin el medicamento adecuado los pacientes podrían fallecer; c) la postulante señaló que desde hace varios años ha solicitado el medicamento ELAPRASE (idursulfasa) en viales de seis miligramos diagonal tres mililitros (6mg/3ml) a la Unidad de Pediatría del Hospital Roosevelt, sin embargo, no ha tenido una respuesta favorable, asimismo se avocó con el viceministro de hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, sin embargo, tampoco tuvo una respuesta favorable, siendo de urgente necesidad que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social les proporcione los medicamentos ELAPRASE (idursulfasa) en viales de seis miligramos diagonal tres mililitros (6mg/3ml), dosis cero punto cero cinco miligramos (0.5mg) por Kilo de peso, que corresponde a veintiséis kilos, equivalente a dos viales semanales, para ser fundido de tres a cuatro horas, la dosis debe ser readecuada cada seis meses de acuerdo a su peso por tiempo indefinido, a su menor hijo (...), y ELAPRASE (idursulfasa) en viales de seis miligramos diagonal tres mililitros (6mg/3ml), dosis cero punto cinco miligramos (0.5mg) por Kilo de peso, que corresponde a veinte kilos, equivalente a dos viales semanales, para ser fundido de tres a cuatro horas, la dosis debe ser readecuada cada seis meses de acuerdo a su peso por tiempo indefinido, a su menor hijo (...); d) petición concreta: solicitó que se dicte sentencia y se otorgue el amparo instado.

B) Casos de procedencia: citó los incisos a) y b) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

C) Ley violada: invocó los artículos 3, 93 y 94 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

TRÁMITE DEL AMPARO

A) Amparo provisional: se decretó en auto del once de diciembre de dos mil diecinueve.

B) Terceros interesados: Estado de Guatemala y Hospital Roosevelt.

C) Remisión de antecedentes: informe circunstanciado rendido por el entonces ministro de Salud Pública y Asistencia Social de fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve.

D) Prueba: se prescindió en resolución del veintiuno de diciembre de dos mil diecinueve.

E) Solicitud de Asistencia para Ejecución del Amparo Provisional: se dictó en auto de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en el cual se ordenó a la ministra de Salud Pública y Asistencia Social que: “a) informe si ya se capacitó al personal del Hospital Roosevelt para administrar el medicamento “elaprase idursulfasa viales de seis miligramos diagonal tres mililitros (6mg/3ml)” a los menores (...) y (...); b) de forma inmediata gire instrucciones a donde corresponda para que suministre el medicamento denominado “elaprase idursulfasa viales de seis miligramos diagonal tres mililitros (6mg/3ml)” a los menores de edad (...) y (...) en la forma prescrita por los médicos del Hospital Roosevelt y como se le ordenó previamente en auto de fecha once de diciembre de dos mil diecinueve dictado por esta Corte e(sic) c) informe dentro del plazo de tres días del estricto cumplimiento de lo ordenado en la presente resolución y remita informe mensual a este Tribunal Constitucional de la forma en que se está brindando la atención y el medicamento correspondiente a los menores referidos, hasta dictar la sentencia respectiva...”.

En cumplimiento de lo ordenado, en memorial de fecha once diciembre de dos mil veinte, la ministra de Salud Pública y Asistencia Social, María Amelia Flores González informó lo siguiente: “Esta cartera, solicitó al Director Ejecutivo del Hospital Roosevelt, a través de oficio identificado como No. 400-2020 U.A.J./I.A.P.S./catc de fecha 10 de noviembre del año en curso, que girara sus instrucciones a donde corresponde, a efecto de requerir la información relacionada al párrafo que antecede, y para tal efecto la Dra. Maryandre Posadas, Jefe de Emergencia de Pediatría a través del Oficio No. JP/255/2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, procedió a dar respuesta informando que los pacientes (...) de 14 años con registro médico 431397 (sic) y su hermano (...) de 11 años con registro médico 431397 SON PACIENTES REGULARES DEL DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL ROOSEVELT a partir del 26 de octubre de 2020 y dentro de sus expedientes clínicos se indica que ambos pacientes están a cargo de la especialidad de Genética de Pediatría del Hospital Roosevelt, EN DONDE HAN TENIDO SEGUIMIENTO POR LOS DIAGNÓSTICOS DE MUCOPOLISACARIDOSIS TIPO II (Síndrome de Hunter); asimismo, en relación a los medicamentos “elaprase (idursulfasa) en viales de seis miligramos diagonal tres mililitros (6mg/3ml) SE LES ESTA APLICANDO TODOS LOS DÍAS MARTES POR LA MAÑANA Y A LA FECHA LLEVAN CUATRO (4) DOSIS INTRAVENOSAS EFECTIVAS; y por último indica que SE ENTRENÓ A VARIOS MÉDICOS JEFES Y RESIDENTES DE PEDIATRÍA DE FORMA VIRTUAL A CARGO DE LA FARMACÉUTICA QUE DISTRIBUYE EL MEDICAMENTO, PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MISMO”.

ALEGACIONES DE LAS PARTES

A) La postulante, no se le tuvo por evacuada la audiencia concedida, dada su notoria extemporaneidad.

B) Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, autoridad impugnada, al evacuar la audiencia concedida indicó, que el doctor Marco Antonio Barrientos Rivas, director ejecutivo del Hospital Roosevelt giró órdenes al licenciado Edson Emmanuel Xiloj Vicente, analista del área de Asuntos Constitucionales y al doctor Maynor Alberto Herrera, coordinador del Comité de Farmacia y Terapéutica, para que efectuaran las coordinaciones que fueran necesarias para la adquisición del medicamento requerido a fin de cumplir con lo ordenado. No hizo peticiones de fondo.

C) Estado de Guatemala, tercero interesado, al evacuar la audiencia otorgada, señaló que es viable que se ordene a la ministra de Salud Pública y Asistencia Social que proporcione los medicamentos junto con el tratamiento en la dosis recomendada, bajo la estricta responsabilidad de la amparista y el médico y cirujano tratante; asimismo, se les brinde asistencia médica constante, tratamiento apropiado (incluyendo medicinas conforme el criterio de los especialistas de la autoridad reclamada) así como los demás servicios médicos que permitan preservar la salud y la vida de los hijos menores de la postulante. Pidió que se otorgue la protección constitucional solicitada.

D) Hospital Roosevelt, tercero interesado, no evacuó la audiencia concedida, a pesar de estar debidamente notificado.

E) El Ministerio Público, Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, al presentar su alegato indicó que a criterio de esa institución, existe el riesgo que la autoridad impugnada no proporcione el medicamento, afectando de manera cierta e inminente la vida y la salud de los menores (...) y (...), por cuanto necesitan que se les suministre el medicamento prescrito para tratar la enfermedad que padecen, con los estudios científicos correspondientes para que no produzca efectos secundarios que puedan causar riesgo a la salud y vida de los hijos de la postulante. Por existir derechos fundamentales que deben ser protegidos de manera inmediata, pidió que se otorgue la protección constitucional de amparo solicitada.

CONSIDERANDO

-I-

El amparo opera como instrumento constitucional por el que puede instarse la eficacia de los derechos humanos fundamentales, ya sea para asegurar su vigencia y respeto o para restablecer su goce cuando existe amenaza de violación o violación propiamente de ellos por decisiones o actos indebidos. Lo que se pretende en amparo es la tutela en forma oportuna de un derecho esencial, lo que adquiere relevancia cuando se trata de la protección del derecho a la vida,

considerado como el de mayor importancia en la escala de derechos fundamentales, ya que todos los demás giran en torno a él.

De ahí que el derecho a la salud no puede ser la excepción, pues éste sólo se justifica como mecanismo de protección a la vida. Siendo estos dos derechos de orden prioritario, y como tales, objeto de protección estatal, salvo ilegitimidad de la acción, el Estado tiene el deber de proteger por todos los medios de que dispone, pues garantizar el goce de una adecuada calidad de vida debe constituir uno de sus fines primordiales.

Dentro de ese contexto es necesario señalar que el artículo 51, de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad. Además, en los artículos 93 y 95 de la Constitución Política de la República de Guatemala se reconoce el goce de la salud como un derecho fundamental mínimo del ser humano y la obligación del Estado, a través de sus instituciones.

-II-

En ese orden, el derecho a la salud es reconocido en la Constitución Política de la República de Guatemala, como en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos y, entre otros alcances, implica el derecho a contar con un sistema de protección de la salud, por el cual las personas puedan acceder al más alto nivel posible de salud, en igualdad de oportunidades. Su desarrollo conlleva la posibilidad real de una persona de recibir atención médica, oportuna y eficaz por el único hecho de ser humano. De esa cuenta, es deber del Estado velar por la salud y asistencia social de todos los habitantes, brindando los servicios necesarios para ello, a través de sus instituciones, mediante acciones de prevención, recuperación y rehabilitación de enfermedades, a fin de procurar a los habitantes del país el más completo bienestar físico, mental y social.

En ese sentido, la Corte de Constitucionalidad en sentencia de fecha veinticuatro de julio de dos mil doce, dictada dentro del expediente número 3501-2011, determinó: "...Los derechos sociales están reconocidos en la Constitución, específicamente en el Capítulo II del Título II (Derechos Humanos). Entre éstos se encuentra el derecho a la salud. Este derecho es fundamental debido a que surge del derecho a la vida, como el más elemental de los derechos humanos. De ahí que merezca reconocimiento en normas de derecho internacional como lo son, entre otros, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y XI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Su desarrollo conlleva la posibilidad real de una persona de recibir atención médica oportuna y eficaz por el único hecho de ser humano, derecho dentro del cual se incluye la prevención de enfermedades y el tratamiento y rehabilitación de éstas, mediante la prestación de servicios médicos hospitalarios o de atención médica, todo ello con el objeto de que a quien le aqueje enfermedad tenga posibilidad adicional de preservar su vida. Con el objeto de positivar el derecho a la salud y la obligación del Estado de proteger a la persona y garantizarle su vida y desarrollo integral, la Constitución Política de la República,

en el artículo 94, establece la obligación del Estado de velar por la salud y asistencia social de todos los habitantes, proveyéndolo a través de sus instituciones, mediante acciones de prevención, recuperación y rehabilitación de enfermedades, a fin de procurar a los habitantes del país el más completo bienestar físico, mental y social. Los servicios médico-hospitalarios deben tender a conservar o restablecer la salud de los habitantes, desde el momento del diagnóstico de la enfermedad hasta el desarrollo del tratamiento que éstos requieran para su restablecimiento. Por ello, resulta innegable e incuestionable la importante función social del Estado en este tema para preservar o mantener los niveles de salud de la población con el propósito de resguardar la salud de las personas y hacer efectivo y garantizar el goce del derecho a la vida. Estos derechos no pueden ceder ni esperar por conflictos administrativos laborales e internos del Estado y sus órganos y entes administrativos, ya que ello constituiría violación a los aludidos derechos humanos. (...) El derecho a la salud es definido por el experto de las Naciones Unidas Paul Hunt, como: “El derecho a un sistema de salud efectivo e integrado, que abarque la asistencia médica y los determinantes subyacentes de salud, que responda a las prioridades locales y nacionales, y que esté al acceso de todos”. (Publicación del discurso de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Louise Albour, durante la 4ta. Sesión del Grupo de Trabajo, sobre el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ginebra, julio 16, 2007. Página 19). El Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha desarrollado una interpretación del derecho a la salud, contenido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Refieren a la tripartita obligación de los Estados de respetar, proteger y satisfacer los derechos reconocidos en el Pacto. Respecto de la segunda, se requiere que los Estados tomen medidas para evitar que terceras partes interfieran con el derecho a obtener asistencia médica adecuada. La tercera, requiere que los Estados tomen medidas positivas que capaciten a las personas individuales y a los grupos para gozar del derecho a la salud. La obligación de satisfacer requiere que los Estados, por ejemplo: i) otorguen suficiente reconocimiento al derecho a la salud en los sistemas nacional, político y legal, preferiblemente en forma de implementación legislativa; ii) adopten una política de salud nacional con un plan detallado para realizar el derecho a la salud; iii) aseguren el suministro de atención médica, incluyendo programas de vacunación contra las principales enfermedades infecciosas; iv) aseguren igual acceso a todos los determinantes subyacentes de salud, tales como alimentos nutricionalmente seguros y agua potable, saneamiento básico y condiciones de vida y vivienda adecuada; v) aseguren la capacitación adecuada de los doctores y personal médico y el suministro de un número suficiente de hospitales, clínicas y otras instalaciones relacionadas con salud, con la debida consideración a su distribución equitativa en todo el país...” (los resaltados no son propios del texto original).

-III-

Este Tribunal Constitucional del estudio y análisis de los antecedentes subyacentes al amparo, teniendo presente que en auto de fecha once de

diciembre de dos mil diecinueve de esta Corte, se decretó el amparo provisional a efecto se brindara de forma inmediata el medicamento requerido por la postulante por la urgente necesidad de sus hijos menores de edad, expone lo siguiente: la prescripción de medicamentos requiere de la especialidad científica necesaria de profesionales expertos para determinar con propiedad el tratamiento y medicinas adecuadas que deban suministrarse a los pacientes; si bien, se ha requerido proveer de un medicamento específico, ello se ha hecho con respaldo de especialistas. Para el caso en cuestión, se cuenta con los certificados médicos y las recetas prescritas por el médico y cirujano tratante, Julio Rafael Cabrera Valverde, que corresponden a los pacientes (...) y (...), los cuales obran a folios veintiocho (28) al treinta y uno (31) de la pieza de amparo, en los cuales consta que fueron diagnosticados con la enfermedad llamada Mucopolisacaridosis tipo II (Síndrome de Hunter) y sugirió que se les proporcione el medicamento ELAPRASE (idursulfasa) en viales de seis miligramos diagonal tres mililitros (6mg/3ml), pues la administración de este medicamento puede preservar la vida y mejorar la condición de los pacientes menores de edad, por lo que este Tribunal Constitucional estima que con los certificados médicos obrantes, se cuenta con el respaldo profesional que asegura que la medicina relacionada es viable para tratar los problemas de salud que padecen, unido a la manifestación sobre la necesidad por tal medicamento, por lo que, es viable, conforme el principio dispositivo, privilegiar ese medicamento en particular, bajo la responsabilidad de quien la solicitó y del médico tratante, ello en atención al derecho que tienen de que se les provea a sus menores hijos de la medicina, que según su estimación y con respaldo médico, les brinde la efectividad y calidad de vida, lo cual constituye un derecho fundamental.

En ese orden, el amparo provisional otorgado por esta Corte en resolución de fecha once de diciembre de dos mil diecinueve no implica bajo ningún aspecto prescripción médica, por el contrario, constituye una resolución que acoge las pretensiones mediante pronunciamientos que no se apoyan en el propio conocimiento científico de este Tribunal Constitucional, sino en la convicción que le aportó las evaluaciones y prescripciones del médico tratante y que se decretó derivado de que el Estado, por norma general, debe garantizar la salud como derecho fundamental, fin que es factible alcanzar por medio de instituciones como la que ahora se reclama en amparo, cuando se cumplen los requisitos pertinentes en el marco legal aplicable, el cual, en el caso concreto, impone que la autoridad reclamada en el presente proceso, cumpla las funciones esenciales que le corresponden conforme la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes.

Aunado a lo anterior, hay que señalar que mediante memorial de fecha once de diciembre de dos mil veinte, la ministra de Salud Pública y Asistencia Social, María Amelia Flores González, informó con respaldo en el oficio número JP diagonal doscientos cincuenta y cinco diagonal dos mil veinte (JP/255/2020) del diez de diciembre de dos mil veinte, signado por la doctora Maryandre Posadas, jefe de Emergencia de Pediatría del Hospital Roosevelt; que dio cumplimiento a lo ordenado en el amparo provisional decretado por esta Corte con fecha once de diciembre de dos mil diecinueve. De donde se desprende que los pacientes (...),

de catorce años de edad, con registro médico cuatrocientos treinta y un mil trescientos noventa y seis (431396) y (...), de once años de edad, con registro médico cuatrocientos treinta y un mil trescientos noventa y siete (431397), son pacientes regulares del Departamento de Pediatría del Hospital Roosevelt y dentro de sus expedientes clínicos consta que ambos están a cargo de la especialidad de Genética de Pediatría de dicho hospital, y que han tenido seguimiento por los diagnósticos de Mucopolisacaridosis tipo II (Síndrome de Hunter); asimismo, señaló la autoridad impugnada que con relación al medicamento ELAPRASE (idursulfasa) en viales de seis miligramos diagonal tres mililitros (6mg/3ml), se les está aplicando los días martes por la mañana y a la fecha llevan cuatro dosis intravenosas efectivas, además señaló que se capacitó a varios médicos jefes y residentes de Pediatría de forma virtual a cargo de la farmacéutica que distribuye el medicamento, para la correcta aplicación del mismo. Sin embargo, si bien consta que se ha dado cumplimiento por parte de la autoridad impugnada a lo ordenado por este Tribunal, es por la enfermedad que padecen - Mucopolisacaridosis tipo II (Síndrome de Hunter)-, que los menores de edad pertenecen al grupo vulnerable de niñez y adolescencia y por ende merecen la especial y urgente protección del Estado, ya que está en riesgo sus vidas, pues al privarles de atención médica, la enfermedad avanza, incapacitándolos y desmejorando paulatinamente su salud y, en ese sentido, se hace necesario que se continúe proporcionando el tratamiento adecuado. En casos similares se ha pronunciado la Corte de Constitucionalidad, en sentencias de fechas diez de octubre, doce de diciembre ambas de dos mil catorce y veintidós de enero de dos mil dieciséis, dentro de los expedientes números 3294-2014, 3957-2014 y 5017-2015, respectivamente.

Por lo anteriormente expuesto, esta Corte estima necesario mantener la orden efectuada a la autoridad denunciada por la urgente necesidad de que se continúe suministrando el medicamento denominado ELAPRASE (idursulfasa) en viales de seis miligramos diagonal tres mililitros (6mg/3ml) en la forma prescrita a los menores de edad (...) y (...), por lo que resulta viable el otorgamiento en forma definitiva de la protección constitucional solicitada para asegurar que la autoridad reprochada siga proporcionando el medicamento multicitado, bajo la estricta responsabilidad de quien lo solicita y del médico tratante, asimismo realice una evaluación especial médica completa a los menores en mención, a fin de determinar la dosis del fármaco sugerido y cualquier otro que sea oportuno, según el caso; esto implica, necesariamente, mantener asistencia médica, tratamiento médico apropiado y los demás servicios médicos tendientes a preservar la salud y la vida de dichas personas, con la celeridad que el caso amerita y según las circunstancias propias de los menores de edad y atendiendo a las mismas consideraciones, deberá comprobar, mediante la observación de los pacientes, luego de que se haya practicado los estudios respectivos y cualesquiera otros mecanismos científicos adecuados, su idoneidad y eficacia y al resolver así deberá declararse, haciendo las demás declaraciones que en Derecho corresponden.

Doctrina legal: la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado con respecto al derecho a la salud de la forma siguiente: i) sentencia de fecha veintiuno de junio de

dos mil once“...Se ha considerado por esta Corte que el amparo opera como instrumento constitucional por el que puede instarse la eficacia de los derechos humanos fundamentales, ya sea para asegurar su vigencia y respeto o para restablecer su goce cuando existe amenaza de violación o infracción propiamente de ellos por decisiones o actos indebidos; pues lo que se pretende en amparo es la tutela en forma oportuna de la protección de un derecho fundamental y esto adquiere suprema relevancia cuando se trata de la protección del derecho a la vida, considerado como el de mayor importancia en la escala de derechos fundamentales. Ergo, el derecho a la salud tiene que ser ampliamente tutelado, pues es considerado como un mecanismo de protección a la vida. Siendo estos dos derechos de orden fundamental, y como tales, objeto de protección estatal, salvo ilegitimidad de la acción, el Estado tiene que protegerlos por todos los medios de los que dispone, pues el garantizar el goce de una adecuada calidad de vida debe constituir uno de sus fines primordiales...”;dictada dentro del expediente número 1332-2011; ii)fallo de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce emitido dentro del expediente número 2846-2012 y iii)sentencia de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece proferida dentro del expediente número 4461-2012.

-IV-

Esta Corte con base en lo considerado estima que la autoridad impugnada actuó con la buena fe que se supone en las actuaciones que le corresponden, razón por la cual, con base en la facultad contenida en el artículo 45 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la exonera del pago de las costas procesales.

LEYES APLICABLES

Artículos citados y 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12 inciso c), 19, 20, 42, 44 y 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 77, 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial; 2inciso b) del Auto Acordado 1-2013; 29 y 35 del Acuerdo 1-2013ambos de la Corte de Constitucionalidad.

POR TANTO

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO, con base en lo considerado y leyes citadas al resolver, **DECLARA: I) OTORGA EN DEFINITIVA** el amparo solicitado por (...), **EN REPRESENTACIÓN LEGAL Y EN EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE SUS MENORES HIJOS (...)** y (...), en contra de la **MINISTRA DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. II)** Se mantiene la orden efectuada a la autoridad denunciada, por consiguiente: a) debe seguir suministrando el medicamento denominado **ELAPRASE** (idursulfasa) en viales de seis miligramos diagonal tres mililitros (6mg/3ml),dosis cero punto cinco miligramos (0.5mg) por Kilo de peso, que corresponde a veintiséis kilos equivalente a dos viales semanales para ser fundido de tres a cuatro horas, la dosis debe ser readecuada cada seis meses de acuerdo a su peso por tiempo indefinido al menor (...) y **ELAPRASE** (idursulfasa)

en viales de seis miligramos diagonal tres mililitros (6mg/3ml), dosis cero punto cinco miligramos (0.5mg) por Kilo de peso, que corresponde a veinte kilos equivalente a dos viales semanales para ser fundido de tres a cuatro horas, la dosis debe ser readecuada cada seis meses de acuerdo a su peso por tiempo indefinido al menor (...); bajo la estricta responsabilidad de quien lo solicita y del médico tratante ;b)realice también una evaluación especial médica completa a los menores antes mencionados, por seguridad de la dosis proporcionada del fármaco referido y cualquier otro que sea oportuno, según el caso; esto implica, necesariamente, mantener asistencia médica (consulta y hospitalización, según sea necesario), tratamiento médico apropiado (incluyendo medicinas que de las evaluaciones resulten convenientes) y los demás servicios médicos tendientes a preservar la salud y la vida de dichas personas, con la celeridad que el caso amerita y según las circunstancias propias de los menores de edad y c) atendiendo a las mismas consideraciones, deberá comprobar, mediante la observación de los pacientes, luego de que se haya practicado los estudios respectivos y cualesquiera otros mecanismos científicos adecuados, su idoneidad y eficacia. **III)** No hay condena en costas ni se impone multa. **IV)** Oportunamente, remítase a la Corte de Constitucionalidad copia certificada del presente fallo, para los efectos contenidos en el artículo 81 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. **V)** Notifíquese, con certificación de lo resuelto, devuélvase la documentación correspondiente a la autoridad impugnada y en su oportunidad archívese el expediente.

Silvia Patricia Valdés Quezada, Magistrada Vocal Primera, Presidenta Cámara de Amparo y Antejudio; Nery Osvaldo Medina Méndez, Magistrado Vocal Segundo; Vitalina Orellana y Orellana, Magistrado Vocal Tercera; Delia Marina Dávila Salazar, Magistrado Vocal Cuarta; Josué Felipe Baquix Baquix, Magistrado Vocal Quinto; Sergio Amadeo Pineda Castañeda, Magistrado Vocal Sexto; Silvia Verónica García Molina, Magistrado Vocal Octavo; José Antonio Pineda Barales, Magistrado Vocal Décimo Primero; Maria Eugenia Morales Aceña, Magistrada Vocal Décima Segunda; Manuel Duarte Barrera, Magistrado Vocal Décimo Tercero. Jaime Amílcar González Dávila, Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente; Jorge Antonio Valladares Arévalo, Magistrado Vocal Primero Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente; Gustavo Adolfo Dubón Gálvez, Magistrado Presidente Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, Departamento de Guatemala. Dora Lizett Nájera Flores, Secretaria de la Corte Suprema de Justicia.